



NO A LA ESTRATEGIA NEOLIBERAL PRIVATIZADORA: ¡LOS DERECHOS SOCIALES NO SON MERCANCÍAS!

**EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN SALUD, EDUCACIÓN, RESIDENCIAS, DE LAS
PENSIONES PUBLICAS. POR UNA BANCA PUBLICA AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN.**

RECUPEREMOS PARA EL BIEN PUBLICO LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS PRIVATIZADOS

Decenas de miles de ciudadanas/os, en especial las personas mayores de edad, con diversidad funcional, en situación de vulnerabilidad, están sufriendo, con la pérdida de su vida, las consecuencias criminales de las privatizaciones y recortes en el sistema público de salud durante la pandemia del Covid-19. En esta tragedia destaca el papel nefasto de las residencias geriátricas privadas que guiadas por el ánimo de lucro y con la complicidad de las administraciones, que no han ejercido su labor de control con eficiencia, las han transformado en tanatorios. Las instrucciones de las administraciones para no trasladar las personas mayores de edad enfermas del covid-19 a las UCIS de los hospitales son inhumanas y destilan gerontofobia.

La pandemia ha dejado al desnudo la estrategia del sistema capitalista neoliberal y patriarcal, con el apoyo de la Banca, fondos de inversión, transnacionales, y con la colaboración servil de los gobiernos de turno, para privatizar los servicios públicos, especialmente en salud, educación, servicios sociales, pensiones, y convertirlos en negocios, explotando a las trabajadoras/es de estos sectores y deteriorando la calidad de estos servicios. Esta ofensiva neoliberal agrava la precariedad y la pobreza que afecta en especial a las mujeres, aumentando con ello la brecha de desigualdad entre ambos sexos y la violencia machista e institucional.

La privatización de sectores estratégicos como la electricidad, gas, agua, además de facilitar una puerta giratoria a la élite política que tomó dicha decisión, ha supuesto la transferencia de enormes beneficios a las transnacionales, el debilitamiento de la capacidad económica del estado y administraciones públicas, expoliar a la ciudadanía con precios abusivos y negar el derecho de las personas vulnerables a estos suministros básicos, incumpliendo la legislación que las protege.

La estrategia privatizadora, a lo largo de los últimos decenios, además de desindustrializar el país sometido a la división del trabajo impuesta por Bruselas y Berlín, también lo empujó a la especulación inmobiliaria con los resultados conocidos en la llamada “crisis del ladrillo” que agudizó la depresión en 2008, y a un turismo sobredimensionado abocado a una gran crisis con la actual pandemia. La privatización de Bankia en la fusión con La Caixa, sin haber recuperado la totalidad del dinero público dedicado para su rescate, es un grave paso atrás en la construcción de una banca pública de suficiente dimensión para garantizar la financiación de proyectos para el bien común.

NO A LA TRAMPA DE LA “ALIANZA PUBLICO-PRIVADA”

El conjunto de intereses inconfesables que ha hipotecado el futuro del país prosigue su estrategia privatizadora, con una ofensiva ideológica y de marketing para tapar sus verdaderas intenciones, los lemas de la colaboración público-privada y últimamente la “alianza público-privada” son una auténtica estafa para seguir privatizando los servicios que todavía permanecen públicos o simplemente transferir recursos públicos a empresas privadas pagándoles cantidades abusivas como ha podido comprobarse en la contratación de servicios de los hospitales privados, o como sucede con la escuela concertada que se enriquece con dinero público sin garantizar la gratuidad a los alumnos y generando desigualdad.

La mayoría social no es ingenua, sabe que en el sistema capitalista el objetivo de las empresas privadas es lucrarse a toda costa. Que para alcanzar dicho objetivo no dudan en corromper a las élites políticas y a los gestores de las administraciones públicas, construyendo redes clientelares que saquean los recursos públicos. La amnistía fiscal del exministro Montoro a los grandes defraudadores fiscales es un buen ejemplo.

La responsabilidad de las instituciones de la Unión Europea en la estrategia privatizadora del sector público y la consiguiente desposesión de la ciudadanía y erosión de la democracia es fundamental. Con sus chantajes económicos el Banco Central Europeo promovió en 2011 la contrarreforma de la constitución

española, mediante el artículo 135 que establecía la prioridad de los objetivos de déficit público y deuda, sacrificando el cumplimiento de los derechos sociales. Presionaron a favor de la contrarreforma ese mismo año de las pensiones públicas. Finalmente, aprobaron la ley de estabilidad presupuestaria que se tradujo en las políticas austericidas de los últimos años y la contrarreforma laboral en 2012.

En la actualidad, la ciudadanía y los movimientos sociales nos encontramos ante un reto decisivo. La Comisión Europea condiciona el acceso de España a los llamados fondos de recuperación a una nueva contrarreforma de las pensiones públicas, que entre otras medidas promueve los planes de pensiones complementarias privadas financiadas con las cuotas de la seguridad social, debilitando el fondo con el que se financia las pensiones públicas, lo cual serviría de justificación para el gobierno de turno para nuevos recortes. En este sentido, la recomendación 16 del Pacto de Toledo recientemente ratificado por el Congreso de diputados, representa el mayor peligro para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Otra de las condiciones para acceder a dichos fondos es la no derogación de la contrarreforma laboral de 2012 decretada bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Para conseguir estos objetivos las instituciones de europeas cuentan con la colaboración de sus “mujeres y hombres de negro” en el mismo gobierno de España, representados por la vicepresidenta Nadia Calviño y el Ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá.

Además, la disputa sobre los objetivos de inversión y distribución de tales fondos va a marcar el conflicto entre la defensa del interés general a través de la inversión pública en salud, educación, reindustrializar el país con empresas públicas para producir lo necesario (material sanitario que se importa, etc.), y el interés privado de las grandes empresas y transnacionales.

UNIDAD EN LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DE LAS PENSIONES PUBLICAS

Llamamos a la clase trabajadora, a la mayoría social, al personal sanitario, enseñante, de las residencias geriátricas y discapacitados, a los pensionistas, al conjunto de movimientos sociales y cívicos, a:

- Fortalecer la alianza en defensa de los servicios públicos ante la amenaza de la estrategia privatizadora.
- Luchar por la recuperación con titularidad y gestión públicas de las empresas y sectores privatizados, especialmente en salud, educación, residencias, servicios sociales. También de los sectores estratégicos de agua, gas y electricidad, que garanticen estos servicios básicos a las familias vulnerables y que permita acabar con el acoso que sufren por parte de las empresas suministradoras.
- Impedir erosión sistema público de pensiones. No a las pensiones privadas de empresa con las cotizaciones a la Seguridad Social. No al Pacto de Toledo. Derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013.
- No a la privatización de Bankia. Nacionalización de la fusión de Bankia y La Caixa.
- Por la remunicipalización de la atención domiciliaria. Trabajo digno para el personal que presta los servicios.
- Persecución efectiva del fraude fiscal, de los paraísos fiscales, prohibición de licitaciones a las empresas con sede en paraísos fiscales.
- Control público y transparente de los fondos de recuperación, exigiendo su uso para proyectos de carácter público destinados al bien común.
- Derogación del artº 135 de la Constitución, de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y la ley “Montoro” que impone techos de gastos arbitrarios a las administraciones autonómicas y locales.
- Plena derogación de la contrarreforma laboral de 2012 y de la legislación que ha promovido la precariedad.
- Dimisión de Nadia Calviño y José Luis Escrivá del gobierno de España. Dimisión de la consejera/o Alba Vergés y Chakir el Homrani del Gobierno de la Generalitat por su nefasta gestión en salud, residencias, etc.

Barcelona, diciembre 2020

Alianza de Mareas y Movimientos Sociales

(En la Alianza participan IAfectats BB Serveis, Aliança contra Pobresa Energética, Asamblea Diversidad Funcional, Asociación Brassavola Honduras, Attac-Acordem, co.bas, Comisión Promotora RGC, Comisión Retorno Digno, Coordinadora asambleas de trabajadores en Paro de Cataluña, Coordinadora Residencias 5+1, Dones abolicionistes, Educació Pública, Las Kelly's de Barcelona, Marea Blanca, Marea Colomense, Marea Pensionista, Marea TV, NO+Precariedad, Plataforma SAD, Resistencia Cínic, Sindicat Llogateres, S.RC.cat., etc.)

Email: alianza.mms@gmail.com



NO A L'ESTRATÈGIA NEOLIBERAL PRIVATITZADORA: I ELS DRETS SOCIALS NO SÓN MERCADERIES!

EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS EN SALUT, EDUCACIÓ, RESIDÈNCIES, DE LES PENSIONS PÚBLIQUES. PER UNA BANCA PÚBLICA A EL SERVEI DEL BÉ COMÚ.

RECUPEREM PER AL BÉ PÚBLIC ELS SECTORS ESTRATÈGICS I SERVEIS PRIVATITZATS

Desenes de milers de ciutadans/es, especialment les persones majors d'edat, amb diversitat funcional, en situació de vulnerabilitat, estan patint, amb la pèrdua de la seva vida, les conseqüències criminals de les privatitzacions i retallades en el sistema públic de salut durant la pandèmia de l'Covid-19. En aquesta tragèdia destaca el paper nefast de les residències geriàtriques privades que guades per l'ànim de lucre i amb la complicitat de les administracions, que no han exercit la seva tasca de control amb eficiència, les han transformat en tanatoris. Les instruccions de les administracions per no traslladar les persones majors d'edat malaltes de l'Covid-19 a les UCIS dels hospitals són inhumanes i destil·len gerontofobia.

La pandèmia ha deixat a l'nu l'estratègia de el sistema capitalista neoliberal i patriarcal, amb el suport de la Banca, fons d'inversió, transnacionals, i amb la col·laboració servil dels governs de torn, per privatitzar els serveis públics, especialment en salut, educació, serveis socials, pensions, i convertir-los en negocis, explotant a les treballadores / és d'aquests sectors i deteriorant la qualitat d'aquests serveis. Aquesta ofensiva neoliberal agreuja la precarietat i la pobresa que afecta especialment a les dones, augmentant amb això la bretxa de desigualtat entre els dos sexes i la violència masclista i institucional.

La privatització de sectors estratègics com l'electricitat, gas, aigua, a més de facilitar una porta giratòria a l'elit política que va prendre aquesta decisió, ha suposat la transferència d'enormes beneficis a les transnacionals, l'afebliment de la capacitat econòmica de l'estat i administracions públiques, espoliar a la ciutadania amb preus abusius i negar el dret de les persones vulnerables a aquests subministraments bàsics, incomplint la legislació que les protegeix.

L'estratègia privatitzadora, al llarg dels últims decennis, a més de desindustrialitzar el país sotmès a la divisió de la feina imposada per Brussel·les i Berlín, també el va empènyer a l'especulació immobiliària amb els resultats coneguts en l'anomenada "crisi de la rajola" que va aguditzar la depressió en 2008, ia un turisme sobredimensionat abocat a una gran crisi amb l'actual pandèmia. La privatització de Bankia a la fusió amb La Caixa, sense haver recuperat la totalitat de diners públics dedicat per al seu rescat, és un greu pas enrere en la construcció d'una banca pública de suficient dimensió per garantir el finançament de projectes per al bé comú.

NO A LA TRAMPA DE LA "ALIANÇA PÚBLIC-PRIVADA"

El conjunt d'interessos inconfessables que ha hipotecat el futur de país prossegueix la seva estratègia privatitzadora, amb una ofensiva ideològica i de màrqueting per tapar les seves veritables intencions, els lemes de la col·laboració publicoprivada i últimament la "aliança publicoprivada" són una autèntica estafa per seguir privatitzant els serveis que encara romanen públics o simplement transferir recursos públics a empreses privades pagant-los quantitats abusives com ha pogut comprovar-se en la contractació de serveis dels hospitals privats, o com succeeix amb l'escola concertada que s'enriqueix amb diners públics sense garantir la gratuïtat als alumnes i generant desigualtat.

La majoria social no és ingènua, sap que en el sistema capitalista l'objectiu de les empreses privades és lucrar-se a qualsevol preu. Que per assolir aquest objectiu no dubten a corrompre les elits polítiques i als gestors de les administracions públiques, construint xarxes clientelars que saquegen els recursos públics. L'amnistia fiscal de l'exministre Montoro als grans defraudadors fiscals és un bon exemple.

La responsabilitat de les institucions de la Unió Europea en l'estratègia privatitzadora de el sector públic i la consegüent desposseïció de la ciutadania i erosió de la democràcia és fonamental. Amb els seus xantatges econòmics el Banc Central Europeu va promoure el 2011 la contrareforma de la constitució espanyola, mitjançant l'article 135 que establia la prioritat dels objectius de dèficit públic i deute, sacrificant el

compliment dels drets socials. Van pressionar a favor de la contrareforma aquest mateix any de les pensions públiques. Finalment, van aprovar la llei d'estabilitat pressupostària que es va traduir en les polítiques austericidas dels últims anys i la contrareforma laboral a 2012.

En l'actualitat, la ciutadania i els moviments socials ens trobem davant d'un repte decisiu. La Comissió Europea condiona l'accés d'Espanya als anomenats fons de recuperació a una nova contrareforma de les pensions públiques, que entre altres mesures promou els plans de pensions complementàries privades finançades amb les quotes de la seguretat social, debilitant el fons amb el qual es finança les pensions públiques, la qual cosa serviria de justificació per al govern de torn per noves retallades. En aquest sentit, la recomanació 16 de l'Pacte de Toledo recentment ratificat pel Congrés de diputats, representa el major perill per a la sostenibilitat de el sistema públic de pensions. Una altra de les condicions per accedir a aquests fons és la no derogació de la contrareforma laboral del 2012 decretada sota el govern de Mariano Rajoy. Per aconseguir aquests objectius les institucions de europees compten amb la col·laboració dels seus "dones i homes de negre" en el mateix govern d'Espanya, representats per la vicepresidenta Nadia Calviño i el ministre de Seguretat Social José Luis Escrivá.

A més, la disputa sobre els objectius d'inversió i distribució d'aquests fons marcarà el conflicte entre la defensa de l'interès general a través de la inversió pública en salut, educació, reindustrialitzar el país amb empreses públiques per produir el necessari (material sanitari que s'importa, etc.), i l'interès privat de les grans empreses i transnacionals.

UNITAT A LA DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS I DE LES PENSIONS PÚBLIQUES

Fem una crida a la classe treballadora, a la majoria social, a el personal sanitari, ensenyant, de les residències geriàtriques i discapacitats, als pensionistes, a el conjunt de moviments socials i cívics, a:

- Enfortir l'aliança en defensa dels serveis públics davant l'amenaça de l'estratègia privatitzadora.
- Lluitar per la recuperació amb titularitat i gestió públiques de les empreses i sectors privatitzats, especialment en salut, educació, residències, serveis socials. També dels sectors estratègics d'aigua, gas i electricitat, que garanteixin aquests serveis bàsics a les famílies vulnerables i que permeti acabar amb l'assetjament que pateixen per part de les empreses subministradores.
- Impedir l'erosió de el sistema públic de pensions. No a les pensions privades d'empresa amb les cotitzacions a la Seguretat Social. No a el Pacte de Toledo. Derogació de les reformes de pensions de 2011 i 2013.
- No a la privatització de Bankia. Nacionalització de la fusió de Bankia i La Caixa.
- Per la remunicipalització de l'atenció domiciliària. Treball digne per al personal que presta els serveis.
- Persecució efectiva de l'fraud fiscal, dels paradisos fiscals, prohibició de licitacions a les empreses amb seu a paradisos fiscals.
- Control públic i transparent dels fons de recuperació, exigint el seu ús per a projectes de caràcter públic destinats a el bé comú.
- Derogació de l'art 135 de la Constitució, de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i la llei "Montoro" que imposa sostres de despeses arbitraris a les administracions autonòmiques i locals.
- Plena derogació de la contrareforma laboral del 2012 i de la legislació que ha promogut la precarietat.
- Dimissió de Nadia Calviño i José Luis Escrivá de el govern d'Espanya. Dimissió de la consellera / o Alba Vergés i Chakir el Homrani de el Govern de la Generalitat per la seva nefasta gestió en salut, residències, etc.

Barcelona, desembre 2020

Aliança de Marees i Moviments Socials

(En l'Aliança participen Afectats BB Serveis, Aliança contra Pobresa Energètica, Assemblea Diversitat Funcional, Associació Brassavola Hondures, Attac-Acordem, co.bas, Comissió Promotora RGC, Comissió Retorn Digne, Coordinadora assemblees de treballadors en Atur de Catalunya, Coordinadora Residències 5+ 1, Dones abolicionistes, Educació Pública, Les Kelly 's de Barcelona, Marea Blanca, Marea Colomense, Marea Pensionista, Marea TV, NO + Precarietat, Plataforma SAD, Resistència Cínic, Sindicat Llogateres, S.RC.cat., etc..)

Email: alianza.mms@gmail.com